



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**DISTRITO JUDICIAL DE SINCELEJO
CIRCUITO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SINCELEJO
JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
SINCELEJO**

Sincelejo, Sucre, septiembre (30) de dos mil veintiuno (2021)

**OFICIO: EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL
PROCESADO: YAN CARLOS BETIN PEÑA
INJUSTO: HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO
RADICADO INTERNO NO. 2016-00266-00 (RADICADO DE ORIGEN No. 2014-01555-00)**

ASUNTO A TRATAR

Procede el despacho a decidir, de manera oficiosa sobre la viabilidad de decretar la **EXTINCIÓN** de la sanción penal que recae sobre el penado **YAN CARLOS BETIN PEÑA**.

1. ANTECEDENTES PROCESALES

El veinticinco (25) de septiembre de 2014, el **JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE SINCELEJO**, previo a la solicitud efectuada por el representante del ente acusador, en audiencia preliminar, consistente en decretar detención preventiva en establecimiento de reclusión, resolvió, decretar contra el aludido señor **JEAN CARLOS BETIN PEÑA**, medida de aseguramiento intramural.

JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DEL CONOCIMIENTO DE SINCELEJO, mediante sentencia de primera instancia, aditada septiembre 25 de 2014 condeno al señor **JEAN CARLOS BETIN PEÑA, A LA PENA PRINCIPAL SESENTA Y TRES (63) MESES DE PRISIÓN**, además se le impuso al procesado la **SANCIÓN ACCESORIA DE INTERDICCIÓN DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS POR EL MISMO TÉRMINO DE LA PENA PRINCIPAL**, luego de haber sido hallado penalmente responsable por la comisión de la conducta punible de **HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO**, así mismo, se le negó la concesión del subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la intramural.

EL JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, asumió el conocimiento de este asunto en septiembre 15 de 2016 y se ofició al **INPEC** para informarle que esta judicatura estaría a cargo de la vigilancia de este proceso y se exigió la remisión de la cartilla biográfica del procesado.

Decisión: Extinción de la sanción penal
Procesado: Jean Carlos Betin Peña
Injusto: Huerto Calificado y Agravado
Radicado Interno No. 2016-00266 (radicado de origen No. 2014-01555-00)

Al abordar el estudio de la solicitud radicada por el apoderado del señor **JEAN CARLOS BETIN PEÑA**, el 7 de diciembre de 2017, consistente en el otorgamiento de la libertad condicional, **RESOLVIO**, mediante providencia calendada **diciembre 12 de 2017** de esa anualidad, **CONCEDERLE** al condenado el mecanismo sustitutivo de la libertad condicional por un periodo de prueba de **DIECISIETE (17) MESES Y DIECISEIS (16.5) DIAS** habida cuenta que había redimido, **CUARENTA Y CINCO (45) MESES Y TRECE PUNTO CINCO (13.5) DÍAS**, previa suscripción de acta o diligencia de compromiso y depósito del valor de **CIENTO CINCUENTA MIL PESOS (\$ 150.000) MTCE** a título de caución prendaria.

La diligencia de compromiso la suscribió en enero 5 de 2018 y oficializo como domicilio actualizado la carrera 10 No 23-40 Barrio El Pinar del Municipio de Sincelejo, Sucre.

2. COMPETENCIA

Es competente este despacho para resolver la solicitud, toda vez que el núm. 8º del art 38 de la ley 906 de 2004, establece que los **JUECES DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD CONOCEN**; (..) DE LA EXTINCION DE LA SANCION PENAL (..) Por lo que seguidamente se procede a decidirla.

3. CONSIDERACIONES

El art. 1º de la Constitución Política consagra que nuestro país es un Estado social de derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, esto último establecido como una norma rectora de la ley sustancial penal y un principio rector de la Ley 65 de 1993.

Ahora bien, el inc. 3 del art. 28 de la Constitución Política establece que en ningún caso podrá haber penas y medidas de seguridad imprescriptibles, disposición que se complementa con el art. 34 de referida norma constitucional que prohíbe la pena prisión perpetúa.

La Corte Constitucional en sentencia T-276 de 2016, respecto a la libertad personal señaló lo siguiente:

“(...) La libertad personal es un principio y un derecho fundante del Estado Social de Derecho cuya importancia se reconoce en diversas normas constitucionales: (i) en el Preámbulo de la Carta como uno de los bienes que se debe asegurar a los integrantes de la Nación; (ii) en el artículo 2º se establece como fin esencial del Estado el de garantizar la efectividad de los principios, y de los derechos consagrados en la Constitución, asignando a las autoridades el deber de protegerlos; y (iii) en el artículo 28 se consagra expresamente que “Toda persona es libre” y contempla una serie de garantías que buscan asegurar el ejercicio legítimo del derecho y el adecuado control al abuso del poder, como el derecho a ser detenido por motivos previamente

Decisión: Extinción de la sanción penal
Procesado: Jean Carlos Betin Peña
Injusto: Huerto Calificado y Agravado
Radicado Interno No. 2016-00266 (radicado de origen No. 2014-01555-00)

definidos por el legislador y en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente."

Esto es, la libertad proporciona una triple naturaleza jurídica, en el entendido que al igual que la dignidad humana y la igualdad, la libertad tiene una naturaleza polivalente en el ordenamiento jurídico colombiano, pues se trata de manera simultánea de un valor, un principio y, a su vez, muchos de sus ámbitos son reconocidos como derechos fundamentales plasmados en el texto constitucional.

De esta manera, dada la prescriptibilidad de las penas, debemos llegar a la inexorable conclusión de que las mismas se **EXTINGUEN**, poniendo fin a la obligación del condenado de cumplir la pena que la ley señala por la infracción cometida, disposición constitucional que se encuentra acorde con los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Colombia que hacen parte del bloque de constitucionalidad stricto sensu y, que por ende, hace parte de nuestro ordenamiento jurídico¹.

Por su parte, el art 3º del Código Penal, establece que la pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado, señalando el art. 10 de la Ley 65 de 1993, que el tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario.

Respecto a este aspecto, la Corte Constitucional en sentencia C-806 de 2002, M. P., Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ, señaló lo siguiente:

"(...) La pena cumple una función de prevención especial positiva, es decir, debe entenderse que la pena debe, entre sus varias finalidades, buscar la resocialización del condenado, obviamente dentro del respeto de su autonomía y dignidad, pues el objeto del derecho penal en un Estado social de derecho no es excluir al infractor del pacto social, sino buscar su reinserción en el mismo."

El anterior concepto tiene como fin último que el interno logre resocializarse y reintegrarse a la colectividad por medio de la construcción de un nuevo proyecto de vida.

De otro lado, el art. 7A de la Ley 65 de 1993, adicionado por el art. 5º de la Ley 1709 de 2014, establece que los Jueces de Penas y Medidas de

¹ "La Declaración Universal de Derechos Humanos como documento jurídico internacional y reconocedor de los mismos, hace referencia a tal derecho en su artículo 3, indicando que "Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona". De igual manera, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 9 numeral 1, expresa que "Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta."

Decisión: Extinción de la sanción penal
Procesado: Jean Carlos Betin Peña
Injusto: Huerto Calificado y Agravado
Radicado Interno No. 2016-00266 (radicado de origen No. 2014-01555-00)

Seguridad tienen el deber de vigilar las condiciones de ejecución de la pena y de las medidas de seguridad impuesta en la sentencia condenatoria.

Por su parte, el art. 88 del Código Penal consagra las causas de extinción de la sanción penal, siendo aquellas específicas circunstancias que acaecen después de cometida la infracción, anulando la ejecución de la pena o extinguiéndola en caso de que se den cualquiera de las anteriores causales, lo que trae como consecuencia que para el sujeto activo de la conducta punible desaparece la obligación de soportar y tolerar la pena impuesta. Ahora que, si bien es cierto, dentro de las seis (6) primeras causas de extinción de la sanción penal no se encuentra señalada la concerniente a la pena cumplida, resulta plausible y razonable que esta situación sea asumida como otra causal de extinción, habida cuenta que las consagradas en dicha disposición sustancial tiene los mismos efectos jurídicos, como son la de cesar el cumplimiento físico de la pena impuesta y el recobro la libertad en caso de que se encuentre restringido ese derecho, por lo que, de ampliarse la reclusión de quien cumplió su sanción resultaría contraria a sus garantías constitucionales y legales, pudiéndose en consecuencia encuadrar esta situación en la última causal de dicha disposición, esto es, las demás que señale la ley, que para el caso sería traer a colación el contenido del núm. 1º del art. 317 de la Ley 906 de 2004, que consagra como una causal de libertad, cuando se hay cumplido la pena según la determinación anticipada que para este efecto se haga, o se haya decretado la preclusión, o se haya absuelto al acusado.

4. CASO CONCRETO

En el sub-judice, se advierte que el señor **YAN CARLOS BETIN PEÑA**, está condenado por el **JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DEL CONOCIMIENTO DE SINCELEJO**, mediante sentencia fechada septiembre 25 de 2014, **A LA PENA PRINCIPAL (63) MESES** y a la PENA ACCESORIA DE INTERDICCIÓN DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS POR EL MISMO TÉRMINO DE LA PENA PRINCIPAL, luego de haber sido hallado penalmente responsable por la comisión de la conducta punible de **HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO, en calidad de AUTOR, luego de verificado el correspondiente PREACUERDO.**

Además se observa por parte de esta judicatura, que en sede del conocimiento, el sentenciador negó al señor **JEAN CARLOS BETIN PEÑA**, los sustitutos penales consistentes en la condena de ejecución condicional y la prisión domiciliaria o en lugar de residencia en el ordinal tercero.

De otra parte esta judicatura, **JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SINCELEJO**, concedió en favor del señor **JEAN CARLOS BETIN PEÑA**, el sustitutivo penal, consistente en la libertad condicional, en virtud de providencia fechada diciembre 12 de 2017²,

² Foliatura 20 del Cuaderno color blanco correspondiente al Juzgado I de Ejecución de Penas de Sincelejo

Decisión: Extinción de la sanción penal
Procesado: Jean Carlos Betin Peña
Injusto: Huerto Calificado y Agravado
Radicado Interno No. 2016-00266 (radicado de origen No. 2014-01555-00)

estableciendo como periodo de prueba un lapso de **DIECISIETE (17) MESES Y DIECISEIS (16.5) DIAS.**

Ahora bien, descendiendo al caso que concentra nuestra atención, encuentra el despacho que el señor **YAN CARLOS BETTIN PEÑA**, cumplió con las obligaciones emanadas de la sentencia por medio del cual se le concedieron beneficios penales, así pues, se logra advertir que el beneficiado suscribió mediante diligencia fecha enero 5 de 2018 acta de compromiso y deposito por concepto de pago de caución prendaria por valor de **CIENTO CIENCIENTA MIL (\$150.000) PESOS MTCE.**

Es dable a este judicatura centran el análisis del sub-judice en la tesis mediante la cual la concesión y permanencia de los subrogados y sustitutivos penal, como lo es la libertad condicional en el presente, están supeditados, como bien lo expresa su *nomen iuris*, a una serie de condicionamientos previamente establecidos por el legislador, de los cuales depende el mantenimiento de la excarcelación, entre los cuales se encuentra el periodo de prueba.

Precisamente, frente a la libertad condicional, señala el art. 64 del Código Penal de la ley 599 de 2000 es su parte pertinente, lo siguiente;

(..) “El **tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá como periodo de prueba.** Cuando este sea inferior a tres años, el juez podrá aumentarlo hasta en otro tanto igual, de considerarlo necesario” (..)

Ha de entenderse que la teleología de ese período de prueba es la confirmación de que el penado no requiere más tratamiento penitenciario del que ya se le ha aplicado, lo cual se evalúa de manera objetiva con la verificación del cumplimiento de las obligaciones que se le imponen cuando se le concede la excarcelación; comprobación para la cual está precisamente el período de prueba, siendo ese el límite temporal en que el funcionario judicial llamado a realizar tal examen, puede concluir si revoca tal beneficio o si declara extinguida la pena.

De suerte que, vencido el plazo del período de prueba sin que se revoque la libertad condicional, no le queda al juez que vigila la ejecución de la pena opción diferente que la declaratoria de extinción por pena cumplida.

Conviene al despacho advertir que la carga de verificación de las obligaciones del penado recae sobre el juez que vigila la condena como de los sujetos procesales, para lo cual cuenta con el acompañamiento del representante del Ministerio Público, y para ello un período de prueba de por lo menos cinco (5) años.

Si bien es cierto que el condenado está obligado a hacer efectivo el depósito de la caución impuesta o de manifestar y de probar su incapacidad económica, es al funcionario judicial y al que representa a la

Decisión: Extinción de la sanción penal
Procesado: Jean Carlos Betin Peña
Injusto: Huerto Calificado y Agravado
Radicado Interno No. 2016-00266 (radicado de origen No. 2014-01555-00)

sociedad, a quienes se les transfiere la carga de gestionar, informar, sobre dicho eventual incumplimiento con miras a la posible revocatoria del subrogado.

Respecto a este aspecto, la Corte Suprema de Justicia en sentencia adiada 26 de junio de 2012 (390098), M. P., Dr. José Leónidas Busto Martínez, señaló lo siguiente:

“La actividad de vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones del condenado que disfruta de libertad condicional, tienen como término máximo el del período de prueba; de manera que con dicho límite temporal precluye cualquier posibilidad para ocuparse de un eventual incumplimiento”.

Ahora sí, refiriéndonos al caso puntual se constata que el proceso se recibió para vigilancia por parte de este juzgado el día 15 de septiembre de 2016, fecha en la cual faltaba poco menos de un semestre para la vigilancia del periodo de prueba, tiempo que además resulta ser insuficiente debido a la escasez del recurso humano y a la alta congestión que sufren hoy día los despachos judiciales.

Por lo que en este orden, al efectuar revisión se logra advertir que el tiempo estipulado para el periodo de prueba, se encuentra vencido, toda vez que desde la fecha de perfeccionamiento, esto es, la fecha de suscripción del acta (05 de enero de 2018), hasta hoy (30 de septiembre de 2021), transcurrieron **CUATRO (3) AÑOS, OCHO (8) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS**, superándose así el lapso establecido en la sentencia, como termino perentorio para el periodo de prueba, esto es **DIECISIETE (17) MESES Y DIECISEIS (16.5) DIAS**.

Además, es oportuno recordar que dentro del expediente no figura elemento probatorio ni mucho menos indicio que genere certeza o advierta a esta judicatura que durante el **lapso** de ejecución el condenado, no haya cumplido con sus obligaciones, que obligue al titular de este despacho, denegar la extinción de la misma o en su defecto obligar su ejecución, puesto que como se ha dicho, en reiteración de la jurisprudencia;

*“los plazos asignados al estado, en el ejercicio del ius puniendi, son perentorios, siendo el **cumplimiento de la pena asignada o del periodo de prueba** límites al mismo, en el entendido que la configuración de tal presupuesto causa de manera automática, eso sí, por disposición legal, la pérdida de la capacidad estatal de perseguir al condenado o en su defecto continuar exigiendo el cumplimiento de la pena, puesto que, para el sentenciado desaparece la obligación de sufrir los efectos de la misma”.*

En consecuencia, esta Judicatura extinguirá la condena impuesta al señor **YAN CARLOS BETTIN PEÑA**, de conformidad con lo establecido en el núm. 6ª art. 88 de la Ley 599 de 2000, y en aplicación de lo anteriormente estipulado en la parte motiva de esta providencia, ello es, la configuración de la causal

Decisión: Extinción de la sanción penal
Procesado: Jean Carlos Betin Peña
Injusto: Huerto Calificado y Agravado
Radicado Interno No. 2016-00266 (radicado de origen No. 2014-01555-00)

del núm. 7 del art citado, que por remisión normativa contempla implícito núm. 1º del art. 317 de la Ley 906 de 2004 ibídem, en cuya parte conveniente consagra como una causal de libertad, cuando se hay cumplido la pena según la determinación anticipada que para este efecto se haga, o se decrete la preclusión, o se absuelva al acusado.

Notifíquese esta decisión al condenado, a su apoderado judicial y al Agente del Ministerio Público, indicándoles que contra esta decisión proceden los recursos de ley.

Una vez ejecutoriada esta providencia, remítase el expediente al **CENTRO DE SERVICIOS PARA LOS JUZGADOS PENALES DE SINCELEJO** para su archivo definitivo.

En mérito de lo brevemente expuesto, **EL JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SINCELEJO**

5. RESUELVE:

PRIMERO. - **EXTINGUIR** la condena de **SESENTA Y TRES (63) MESES DE PRISION**, de prisión impuesta al señor **YAN CARLOS BETIN PEÑA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.047.420.176 expedida en Cartagena, condenado como autor penalmente responsables de la comisión del **DELITO DE HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO**, proferida por el **JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DEL CONOCIMIENTO DE SINCELEJO**, mediante sentencia fechada septiembre 25 de 2014.

SEGUNDO. Conceder a favor del señor **JEAN CARLOS BETIN PEÑA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.047.420.176 expedida en Cartagena, la libertad inmediata e incondicional por pena cumplida, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO.- Líbrese la correspondiente comunicación a la Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de esta ciudad, haciéndole saber que el condenado supero en su totalidad el periodo de prueba y se le restableció completamente el derecho a la libertad que solo surtirá efecto siempre y cuando el sentenciado no esté requerido por otra autoridad.

CUARTO.-Notifíquese esta decisión al condenado, a su apoderado judicial y al Agente del Ministerio Público.

QUINTO.- Una vez ejecutoriada esta providencia, remítase el expediente **CENTRO DE SERVICIOS PARA LOS JUZGADOS PENALES DE SINCELEJO**, para su archivo definitivo.

Decisión: Extinción de la sanción penal
Procesado: Jean Carlos Betin Peña
Injusto: Huerto Calificado y Agravado
Radicado Interno No. 2016-00266 (radicado de origen No. 2014-01555-00)

SEXTO:-Enviar por Secretaría las comunicaciones a las autoridades encargadas de llevar registros de anotaciones y antecedentes delictuales, para lo de su competencia.

SEPTIMO: Contra esta decisión proceden los recursos ordinarios de reposición y apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ARTURO GUZMAN BADEL

Juez